



Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

**CAUSA N°5393/2021**

*Sentencia Definitiva*

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos **EL CAÑADON S.R.L. c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA**, se procede a votar en el siguiente orden:

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO**

EL CAÑADON S.R.L. apela la Resolución 2020-151-E-AFIP-DICRSS#SDGTLSS en relación con la **deuda determinada por el periodo 06/2016 a 01/2018** en concepto de contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social, con mas intereses y multa por la aplicación del **Decreto 814/2001**

La recurrente no efectúa el depósito previo de las sumas cuestionadas, ( conf lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 18820). **Acompaña póliza de seguro de caución-Tutelar Seguros de Caución.** en su reemplazo

Atento las constancias de autos, y el seguro referido, considerado un sucedáneo valido del recaudo del depósito previo. ( conf. criterio Alto Tribunal “ Origenes AFJP S.A. C/ Administración Federal de Ingresos Públicos, sent del 04/11/2008), se habilita la instancia y se analiza el recurso impetrado.

Considera la recurrente que. el organismo fiscal realizó un improcedente ajuste con base en una supuesta omisión de ingresar diferencias de contribuciones a la Seguridad Social por la aplicación del fisco del Dto. 814/01 , al congelar el monto de facturación anual establecido en el año 2001 Analiza las disposiciones , cita a modo de ejemplo la Res. 675/02 y la 563/209 elevando el tope de 48.000.000

Señala que es una PYME estando muy por debajo de los montos de facturación anual que define la misma, y que encuadra en el inciso b) del Decreto 814/01 siendo beneficiar de la reducción allí prevista. Refiere la jurisprudencia mayoritaria habida sobre la materia y considera que no se la puede otorgar autonomía al Dec.1009/01 sino que se lo debe conjugar con la Res. 24/01 de SEPyme y modificatorias.

Destaca la situación que se planteo pendiente la vía recursiva por el reclamo de las diferencias debatidas, el Fisco generó boleta de deuda y trabó embargo sobre sus cuentas paralizándola iniciando la causa judicial que individualiza,. ejecución que fue rechazada pero que le ocasiono erogaciones de tiempo y dinero, alegando temeridad y malicia con la que actuó el Fisco.

El organismo, por su parte, analiza lo dispuesto por el Decreto N° 814/2001, el Decreto N° 1009/01, la Resolución General N° 1095/01 -



Afirma que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyME N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo, ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación.

La Resolución SPyME N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividad (entre ellas, servicios y comercio), define el concepto de “ventas totales anuales”, establece parámetros de cálculo de esas ventas y fija sus montos máximos (que luego fueron elevados por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06).

Sostiene que el concepto de PyME “a los efectos la determinación de la alícuota de contribuciones patronales” es el que surge del Decreto N° 1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01. En síntesis, señala, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

Concluye que las ventas totales anuales de la rubrada la colocan dentro de los empleadores previstos en el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 814/01, siendo así ajustados a derecho los cargos intimados en autos, los que deben ratificarse.

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez la Resolución 21/2010 en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013, 357/2015, 11/2016, 103/2017, 154/2018, 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2)

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. Asimismo, la Ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

Ello así, el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

Con respecto a la alegación que efectúa sobre la situación planteada en razón de la causa judicial incoada por el Fisco, pendiente la vía recursiva de autos, es un tema que trasciende el objeto del recurso.

En atención al modo como se resuelve, las costas se imponen al organismo, conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos CD.G.I.C" con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557.

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus



citadas, 320;495;339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018) se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 24 UMA, equivalente a \$249.600 doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos ( conf. Acordada 25/2022, valor UMA 1.400).

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora 24 UMA, equivalente a \$249.600 doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos ( conf. Acordada 25/2022), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. ( cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533)

**EL DOCTOR JUAN A.FANTINI ALBARENQUE DIJO**

Adhiero al voto del Dr. Carnota

**LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO**

No puedo compartir el criterio de mi colega de Sala.

La empresa EL CAÑADON SRL impugna la Resolución de AFIP 151-E-2020 que no hizo lugar a un pedido de revisión oportunamente presentado contra el acto administrativo que determinó la existencia de una deuda por diferencia en las contribuciones ingresadas por incorrecta aplicación del inciso b. del artículo 2º del Decreto 814/2001, durante los periodos junio 2016 a enero 2018, más actualización y multa.

Concretamente la apelante rechaza la deuda determinada por entender que la interpretación efectuada por el organismo fiscal al aplicar los decretos 814/01, 1009/01, y Resolución General de AFIP 1095/01 resulta desacertada ya que para reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes para el ingreso de las contribuciones, se omite aplicar el artículo 1º de la Resolución 675/02 -derogado por la disposición 147/2006 (SPYME) y Resolución 21/2010 (SPYME) que sustituye el artículo 1 de la Resolución 24/01 en cuanto al valor de ventas anuales. Entre los argumentos vertidos sostiene en que existen sobradas razones para interpretar la legislación de la manera en que lo hizo, pues afirma que el decreto 814/01 es una norma modificada o complementada por otras normas y que su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola. Explica que la remisión efectuada por el decreto 1009/01 a la Resolución SEPyME N°24 del mismo año tiene por finalidad la definición de la actividad principal del empleador y su consiguiente categorización y a la forma de cálculo de sus ventas, pero actualmente lo hace su modificatoria, la Resolución 563/2019, que actualizó los montos de facturación por categoría y sector -utilizados para definir a la Micro, Pequeña y Mediana





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Empresa (MiPymes)- y elevó el monto inicialmente de \$ 48.000.000 a \$ 1.502.750.000 para empresa de categoría mediana del tramo 1 de actividad comercial, en la cual la impugnante está encuadrada. Por último, refiere que el sentido común impone la actualización de la norma pues de lo contrario se estaría violando el espíritu y el propósito de la misma.

La demandada rechaza la apelación presentada argumentando que los agravios vertidos no son más que una disconformidad con lo decidido en el ámbito administrativo pero que en realidad no hay agravios concretos pues en ningún momento demostró que la aplicación efectuada de la norma fuera incorrecta. Explica que las leyes 24467 y 25.300 establecen el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs sin embargo ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación. Con esa finalidad la resolución SPyME N° 24/01 clasifica a las empresas según su tipo de actividades, entre ellas servicios y comercio, define el concepto de ventas totales anuales, establece parámetros de cálculo para esas ventas y fija sus montos máximos. Destaca que el concepto de PyME a los efectos de la alícuota de contribuciones patronales es la que surge del decreto 1009/01. En cuanto a la remisión efectuada por el Decreto 1009/01 a la Resolución SPyME N°24, el único objetivo de esa remisión es la de definir la actividad principal del empleador y la forma de cálculo de sus ventas, pero el concepto PyME a los efectos de la determinación de la alícuota es la que surge de dicho decreto, ya que no ha sido modificado (ver contestación de agravios).

Con respecto a la exigencia impuesta por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante manifiesta que el cumplimiento de la misma importaría una grave lesión a su derecho de propiedad comprometiendo el normal desarrollo económico y financiero de la empresa motivo por el cual acompaña un seguro de caución extendido por la empresa “Tutelar Seguros SA, póliza N°16.858, por la suma de \$ 1.998.230,21 solicitando se tenga por cumplido el requerimiento normativo.

Entiendo prudente habilitar la presente instancia dado lo elevado del monto que se reclama y que, en principio, su depósito bien podría comprometer el normal desenvolvimiento financiero de la impugnante lesionando la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros).

Por otra parte, el Máximo Tribunal de Justicia ha expresado que la constitución de un seguro de caución es suficiente para garantizar el interés fiscal motivo por el cual constituye

Fecha de firma: 06/10/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35447140#333282391#20221006085951162

sucedáneo valido a los efectos de posibilitar la apertura de la instancia judicial (CSJN sent. del 04/11/2008 “Orígenes AFJP SA c/Administración Federal de Ingresos Públicos”), por lo que procederé a analizar la cuestión de fondo.

Sobre el tema en disputa ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 –ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.





Poder Judicial de la Nación

## CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública por lo que no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo a mayor abundamiento he de expresar que los decretos 814/01 y 1009/01 así como el artículo 173 de la ley 27430 fueron derogados por la ley 27.541, la cual en su capítulo tercero bajo el título “Seguridad Social. Contribuciones Patronales” estableció un nuevo régimen de alícuotas. Esta modificación si bien no alcanza al periodo reclamado (junio 2016 a enero de 2018) deberá tenerse en cuenta para periodos posteriores.

Con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, y lo dispuesto por la ley 27.423 se establecen los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 15 UMA (\$156.000) y 10 UMA (\$104.000) respectivamente, CSJN. Ac. 25/2022.

Por lo expuesto propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada en 15 UMA (\$156.000) y 10 UMA (\$104.000) en favor de la representación letrada de la parte actora (CSJN. Ac.25/2022). Así lo voto.

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría el Tribunal **RESUELVE** Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora 24 UMA, equivalente a \$249.600 doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos (conf. Acordada 25/2022), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “ sent. Del 16.06.03Fallos 316:1533)

Fecha de firma: 06/10/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#35447140#333282391#20221006085951162

Regístrese. Notifíquese. Publíquese y, oportunamente, devuélvase.

JUAN A. FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara  
(Subrogante)

NORA CARMEN DORADO  
Juez de Cámara

Ante m AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

MPV

